



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

Expte. N° 27.483/2023.-

“DTT S.R.L. –TF 36360-I c/Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo”.

///nos Aires, 16 de agosto de 2024.- PAF

Y VISTOS, CONSIDERANDO:

I.- Que mediante sentencia del [24/11/2022](#) el Tribunal *a quo* tuvo a la parte actora por desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición, con relación al Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales enero 2008 a enero 2010 (Resolución N° 70/2012), febrero a abril de 2010 (Resolución N° 90/2012) y enero 2006 a diciembre 2007 (Resolución N° 88/2012), en los términos del artículo 305 del C.P.C.C.N., con costas.

Asimismo, reguló los honorarios de la representación fiscal.

I.1.- Para así decidir recordó que la firma actora interpuso recurso de apelación solicitando la revocación de las Resoluciones N° 70, N° 88 y N° 90, todas ellas del año 2012, por medio de las cuales se determinó, en conjunto con sus accesorios, el Impuesto al Valor Agregado para los períodos antes indicados, dejando suspendida la aplicación de la multa en los actos indicados, conforme lo dispuesto por el art. 20 de la Ley Penal Tributaria.

Indicó que luego de haber contestado el Fisco Nacional los recursos en traslado, la parte actora con fecha 17/04/2017 desistió de la acción y del derecho en los términos de la ley 27.260 tras acompañar el Formulario F.408 NM (cfr. 692/693, 696/696vta. y 789/793).

Sustanciado que fuera con el organismo fiscal, éste contestó el traslado deducido y señaló que la pretensión de acogimiento era improcedente al no cumplirse con los requisitos que la norma establece.

En virtud de la vigencia de la ley 27.541 y sus modificaciones, ampliada por la ley 27.653 se intimó a las partes para que informen si las obligaciones principales apeladas en autos habían sido regularizadas previamente o en los términos de la normativa mencionada.

A fs. 779 contestó lo requerido la parte actora manifestando que no ingresó el tributo apelado puesto que ya había sido regularizado con anterioridad y como consecuencia de ello se le requirió a la contribuyente acompañe información de pago, quien manifestó a fs. 789/793 lo señalado con anterioridad, sin incorporar documentación alguna que respalde sus dichos.

Por su parte, el Fisco Nacional a fs. 802 denunció que no se registraba –a la fecha de contestación- que la actora haya cancelado las obligaciones discutidas en autos, tampoco realizó compensaciones para los períodos involucrados, no se acogió a ningún plan de pago y no se encuentra alcanzada dentro de los contribuyentes habilitados por el art. 8° de la ley 27.541.



I.2.- Sentado lo expuesto, el T.F.N. se expidió acerca del desistimiento planteado por la parte actora en los términos del artículo 30 de la RG N° 3919/2016.

Luego de recordar lo dispuesto por dicha norma –referida al art. 46 de la ley 27.260–, señaló que para gozar de los beneficios previstos en la citada ley es necesario que se efectúe el pago de las obligaciones principales y el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la misma, extremo que no encontró cumplido en autos, conforme lo informado por el ente fiscal a fs. 802 y por la actora a fs. 789/790, al no acompañar la documentación señalada.

Por lo tanto, toda vez que de autos no surge la presentación a la adhesión al mencionado régimen, el Formulario N° 2009, ni el pago del impuesto especial, el Tribunal Jurisdiccional Administrativo concluyó que no procedía el desistimiento en los términos del Libro II, Título I, de la ley 27.260.

Sin perjuicio de ello, recordó lo previsto por el artículo 305 del C.P.C.C.N. y teniendo en consideración que la actora a fs. 692/693, 696/696vta. y 789/793 desistió de los recursos interpuestos a través de la presentación del Formulario F.408/NM –extremo confirmado por el Fisco Nacional en su presentación de fs. 742/743–, tuvo por desistida a la contribuyente de la acción y del derecho, incluso el de repetición, con relación al Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales enero 2008 a enero 2010 (Resolución N° 70/2012), febrero a abril de 2010 (Resolución N° 90/2012) y enero 2006 a diciembre 2007 (Resolución N° 88/2012), en los términos de la normativa mencionada inicialmente.

II.- Que a fs. 811/816vta. se presentó la parte actora, acompañó documentación y solicitó aclaratoria al T.F.N. sobre la resolución reseñada en el apartado que antecede, argumentando que: a) no es un hecho controvertido el pago del impuesto especial, b) el Tribunal *a quo* omitió resolver sobre la admisibilidad sustancial del régimen de la ley 27.260 y c) la improcedencia del desistimiento en los términos del art. 305 del C.P.C.C.N.

Mediante resolución del 7/12/2022 la instancia anterior rechazó el recurso de aclaratoria presentado (cfr. fs. [digitales 22/27](#)).

III.- Que disconforme con lo decidido en las referidas resoluciones, a fs. 825/vta. la actora interpuso recurso de apelación, habiendo sido concedido únicamente el deducido contra la sentencia de fecha 24/11/2022.

A fs. 831/843vta. la actora presentó su [memorial](#), el cual fue replicado por el organismo fiscal solicitando su rechazo y confirmación del pronunciamiento recurrido (cfr. [fs. digitales 4/17](#)).

A) Luego de recordar los antecedentes del caso, se agravió contra la sentencia del 24/11/2022 al considerar que no receptó correctamente el planteo jurídico efectuado por su parte y la del 7/12/2022 por los argumentos que se reseñan a continuación.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

A).1.- En primer lugar, expuso que el Tribunal *a quo* incurrió en un error al interpretar aplicable al caso el desistimiento previsto por el art. 305 del C.P.C.C.N., cuando su parte supeditó el desistimiento de la acción a la procedencia de la adhesión al régimen previsto en la ley 27.260.

Señaló que el Formulario F.408, presentado oportunamente, responde sólo y exclusivamente al cumplimiento del régimen mencionado; por lo cual consideró que, si la instancia anterior concluía que no correspondían los beneficios pretendidos, no podría haber considerado tener por desistida de la acción sólo con el formulario mencionado, debiendo la causa haber seguido su curso.

Con motivo de lo expuesto, razonó que el pronunciamiento recurrido resultaba arbitrario.

A).2.- Por otra parte, cuestionó que el T.F.N. hubiera entendido que su parte no abonó el tributo especial establecido por la ley 27.260 alegando que ello es una premisa falsa, puesto que tal pago sí aconteció (tal como surge de la documentación acompañada). Señaló que tal circunstancia derivó en que se interpretara que no eran procedentes los beneficios de la mencionada ley y, en consecuencia, se aplicara una normativa procesal (el desistimiento en los términos del art. 305 del C.P.C.C.N.) que no fuera invocada por las partes, afectándose así el principio de congruencia, además de alegar que la sentencia recurrida fue dictada en forma *extra petita*.

Agregó que la demandada no controvertió el pago del impuesto especial, sino que por el contrario, sobre el punto solamente argumentó la improcedencia sustancial de la adhesión al régimen previsto por la ley 27.260 (cfr. fs. 695) extremo que no fuera resuelto por el pronunciamiento impugnado. Es decir, el fundamento dado por el Tribunal *a quo* para denegar la pretensión actoral, es un hecho que no está en discusión.

Sobre la base de lo expuesto, solicitó la revocación de la sentencia recurrida por omisión.

B) Acto seguido se expidió acerca de la procedencia sustancial de la ley 27.260, analizando lo previsto por el art. 46 de la ley y el art. 30 de la RG AFIP N° 3919, a los fines de demostrar que su parte dio acabado cumplimiento con la normativa al presentar el F.408 –aprobado por la contraria– y sin que existan las causales de exclusión previstas por el art. 84 de la ley 27.260. En tal sentido, razonó que resultaba procedente su adhesión al Título I del régimen, propiciándose que se procediera al archivo de las actuaciones.

En vistas de lo expuesto, solicitó se revoquen las sentencias recurridas y se admita el acogimiento al régimen de la ley 27.260 al caso concreto. En subsidio, solicitó que se mantenga la revocación pretendida y se ordene al T.F.N. la prosecución de la causa según su estado y el dictado de una sentencia conforme a derecho y a las constancias acompañadas.



Acompañó documental para acreditar el pago especial del tributo (cfr. art. 41 de la ley 27.260).

IV.- Que así planteadas las cuestiones, cabe señalar que en el estudio y análisis de las posiciones de las partes se seguirá el criterio trazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que los jueces no se encuentran obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso con sustento en un pronunciamiento válido (cfr. C.S.J.N., *Fallos*: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros y, en sentido concordante, esta Sala, *in re*, “Importadora y Exportadora del Norte S.A. c/ E.N. -A.F.I.P. -D.G.I.”, Expte. n° 18.952/13, del [17/02/2021](#), entre muchos otros).

Asimismo, es menester recordar que de conformidad con lo establecido por el art. 86 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.), en cuanto al análisis de las cuestiones de hecho y prueba relacionadas con la causa, se prevé una limitación en razón de la cual corresponde -en principio- estar a lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación, salvo que se demuestre que se ha incurrido en arbitrariedad manifiesta, en la valoración de dichos aspectos (énfasis agregado, cfr. esta Sala, *in re*, “Ferrari, Carlos Isidoro c/D.G.I.”, Expte. N° 25.058/2014, del [7/08/2014](#), entre muchos otros).

En especial, la ley hace referencia a la ocurrencia de una violación manifiesta de las formas legales en el procedimiento ante el T.F.N., lo que habilitaría a esta Cámara a declarar la nulidad de las actuaciones, salvo que corresponda abrir a prueba la causa en esta instancia lo que, de por sí, constituye una situación excepcional.

Al respecto, y teniendo en consideración los términos empleados por la representación letrada del Fisco Nacional en su memorial, debe agregarse que una correcta hermenéutica del alcance del término “manifiesta”, indica que se está adjetivando al antecedente de modo patente, descubierto, claro, o sea, sin que resulte necesaria efectuar ninguna investigación para desentrañar lo oculto (cfr. doctr. de *Fallos*: 293:133, *in re*, “Pustelnik”).

V.- Que a modo de recapitulación, es preciso señalar que de la compulsa de la causa, que se tiene a la vista, se advierte lo siguiente:

a) En estos actuados (Expte. N° 36.360-I) la parte actora discute la legitimidad de la Resolución N° 70/2012 (DV RRCO) por medio de la cual se impugnaron las DD.JJ. del Impuesto al Valor Agregado presentadas, lo cual diera lugar a la determinación de oficio de tal impuesto para los períodos fiscales 1/2008 a 1/2010 estableciéndose que debía abonar la suma de \$ 5.210.172,68 con más sus intereses resarcitorios por \$ 4.799.819,39 (confr. art. 2°). (cfr. [recurso de apelación fs. 1/67](#)) (cfr. [Resolución n° 70/12 a fs. 1/33](#)).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

b) Asimismo, mediante los decisorios de fechas 19/03/2013 y 24/05/2013 (cfr. fs. 672 y fs. 675) el Tribunal Fiscal de la Nación dispuso la acumulación de los Exptes. N° 36.655-I y N° 36.575-I al referido en el punto anterior, toda que vez en ellos la accionante cuestionó las Resoluciones N° 90 y N° 88 del 2012 (DV RRCO) que impugnaron las DD.JJ. presentadas en el I.V.A. para los períodos fiscales 2 y 4/2010 y 1/2006 a 12/2007 por las que se reclamó las sumas de \$ 163.083,04 y \$ 1.938.751,99 por tributo y de intereses resarcitorios las sumas de \$ 115.483,69 y \$ 2.083.693,94 respectivamente (cfr. [recurso de apelación contra Resolución n° 88/12 a fs. 68/134](#) y [recurso de apelación contra Resolución n° 90/12](#)) (cfr. [Resoluciones n° 88 y 90/12 obrantes a fs. 34/65 y 66/96](#)).

c) Con fecha 25/04/2017 fue presentada en autos una copia del F.408/NM presentado ante la A.F.I.P. mediante el cual la parte actora formulara su allanamiento respecto del tributo, período y montos discutidos en autos (cfr. datos consignados en los casilleros “Rubro 2” y “Observaciones” de fs. 692/693).

En concordancia con lo señalado, a fs. 696/697 obra un escrito presentado por la contribuyente del que surge: *“Conforme lo dispone la reglamentación de la ley 27.260, vengo por la presente a acompañar copia del F.408 presentado ante la AFIP-DGI-Dirección Regional Córdoba el 17 de abril de 2017, ratificando su contenido y manifestando asimismo que dicha presentación implica por parte de mi mandante el desistimiento de la acción y del derecho, incluso el de repetición”*.

d) Sustanciado que fuera con el organismo fiscal, éste a fs. 742/743 lo contestó. Luego de recordar el objeto de impugnación de las causas ante el T.F.N., que el formulario F.408 presentado por la actora lo fue respecto de la causa principal y sus acumulados en los términos del Título I, Libro II de la ley 27.260 y lo previsto por el artículo 46, incisos c) y d), de la citada ley en cuanto a la adhesión del contribuyente al Título I de la ley indicó: *“...se entiende que no resulta procedente tal petición, puesto que la falta de documentación de respaldo de los créditos fiscales se configuraría en un tema técnico”*.

“En consecuencia, el criterio de “ajustes técnicos”, se corresponde a la materia imponible se encuentra debidamente exteriorizada y declarada por el contribuyente, siendo el ajuste originado en diferencias de criterio respecto de la interpretación y/o aplicación de la norma técnica o jurídica en la que el fisco considera que debe ser encuadrada la situación en cuestión (ejemplos: gravabilidad o no de un bien u operación, procedencia de exenciones, diferencias de valuación o de alícuota aplicable, etc.), es decir, que no derivan de tenencias y/ o bienes. Estos ajustes no son susceptibles de ser imputados conforme lo dispuesto por el artículo 30 de la Resolución General N° 3919 (AFIP), dado que no se vinculan a bienes sincerados”.

“Por lo expuesto, no correspondería acceder al pedido de la rubrada, respecto del Título I de la Ley 27.260, por no encontrarse cumplidas las



condiciones que tal normativa establece. Por tal razón, se solicita a V.E. Tribunal se rechace el pedido de la actora, con costas”.

e) A fs. 748/751 la parte actora replicó la respuesta dada por la demandada rechazando la conclusión esgrimida y recordó para ello lo previsto por el art. 46 inciso c) de la ley 27.260 así como también el art. 30 de la RG 3919 y señaló que el F.408/NM fue aceptado por su contraparte, por lo que entendió que resultaba procedente la adhesión al Régimen de la normativa mencionada y el posterior archivo de la causa.

Denunció que abonó el impuesto especial, imputándose debidamente la existencia de bienes y añadió que al tiempo de la presentación del F.408 las obligaciones en cuestión se encontraban en curso de discusión administrativa, no hallándose firme la determinación de oficio a la fecha de promulgación de la ley 27.260. Reiteró su allanamiento total e incondicional a la pretensión fiscal, desistiendo y renunciando en el marco de lo previsto por el art. 30 de la RG 3919 entre otras cuestiones.

f) A fs. 765/766 el Fisco Nacional responde los dichos efectuados por la actora reiterando las conclusiones efectuadas en su presentación de fs. 742/743, sin perjuicio de aclarar que la falta de documentación de respaldo de los créditos fiscales pretendidos por el actor configuraría un tema técnico.

Reiteró su interpretación acerca del “ajustes técnicos” dada en su presentación anterior y aclaró que la falta de documentación, en la cual se fundó la impugnación a la actora, fue reconocida por ella misma toda vez que el crédito proviene de facturas emitidas por las empresas indicadas en el ajuste, de lo cual se desprende que no habría operaciones marginales o salidas de fondos destinadas a adquirir bienes y/o mantener fondos no exteriorizados, es decir que no derivan de tenencias y/o bienes.

Por lo tanto, indicó, dichos ajustes no son susceptibles de ser imputados conforme lo dispuesto por el artículo 30 de la RG 3919 (A.F.I.P.), dado que no se vinculan a bienes sincerados, por lo que nuevamente entendió que no correspondía acceder al pedido de acogimiento por no encontrarse cumplidas las condiciones que la norma establece.

g) A fs. 769/771vta. la actora nuevamente responde el traslado que le fuera conferido sobre la segunda contestación dada por la demandada, en la cual reiteró los fundamentos efectuados por su parte en su presentación anterior.

h) Con fecha 30/05/2022 el T.F.N. le requirió a las partes informen si las obligaciones principales determinadas en las resoluciones apeladas, habían sido regularizadas en los términos de la ley 27.653, o si ya se encontraban canceladas con anterioridad, a los efectos de la aplicación de los beneficios allí previstos (cfr. fs. 776).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

i) A fs. 779 la parte actora informó que las obligaciones se encontraban canceladas con anterioridad (conf. ley 27.260), motivo por lo cual a fs. 780 el Tribunal *a quo* solicitó que acredite la documentación respaldatoria de la cancelación denunciada.

A fs. 789/792 la parte actora acompañó el F.408/NM oportunamente presentado en la causa y a fs. 802 el Fisco Nacional informó que no se verificaban la presentación de obligaciones referidas al I.V.A. discutidas en autos, ni que se hubieran realizado compensaciones para los períodos involucrados, ni la presentación de planes de pago y que el contribuyente en cuestión no se encuentra dentro del universo de contribuyentes habilitados por el art. 8º de la ley 27.541.

En tal sentido, se opuso a la aplicación del Título I de la ley 27.260 tal como fuera dictaminado previamente.

j) Con posterioridad, el 24/11/2022, el Tribunal *a quo* dictó la sentencia reseñada en el considerando I.-, recurrida por la parte actora, y cuyo análisis se encuentra a estudio de esta Alzada.

VI.- Que, así las cosas, es pertinente recordar que la ley 27.260 en el Título I del Libro II –normativa invocada por ambas partes como aplicable al caso de autos– dispuso un sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior.

En particular, el artículo 46 de la citada ley establece los beneficios de los cuales gozaran los sujetos que, en su parte pertinente, indica que: *“Los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional e ingresen el impuesto especial, en caso de corresponder, que se establece en el artículo 41 (...) gozarán de los siguientes beneficios en la medida de los bienes declarados: (...) c) Quedan liberados del pago de los impuestos que se hubieran omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes y tenencias de moneda declarados en forma voluntaria y excepcional, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 2. Impuestos internos y al valor agregado. El monto de operaciones liberado se obtendrá multiplicando el valor en pesos de las tenencias exteriorizadas, por el coeficiente resultante de dividir el monto total de las operaciones declaradas —o registradas en caso de no haberse presentado declaración jurada— por el monto de la utilidad bruta, correspondientes al período fiscal que se pretende liberar. No se encuentra alcanzado por la liberación el crédito fiscal del impuesto al valor agregado, proveniente de facturas consideradas apócrifas por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos”.*

Por su parte, el art. 30 de la RG AFIP 3919 –normativa bajo la cual el T.F.N. analizó el desistimiento formulado por la actora– prevé, en lo que al caso de autos interesa, que las liberaciones referidas en el art. 46 de la ley 27.260 también alcanzan a las obligaciones que se encuentren en curso de discusión



administrativa, contencioso administrativa o judicial, siempre que, en su caso, la determinación de oficio no se encuentre firme a la fecha de promulgación de dicha ley.

Para ello, entre otras cuestiones, determina la presentación del Formulario de Declaración Jurada N° 408 (Nuevo Modelo), ante la dependencia regional pertinente de la A.F.I.P., que formaliza el allanamiento total e incondicionalmente a la pretensión fiscal, desistiendo y renunciando a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo, en su caso, el pago de las costas y gastos causídicos.

Asimismo, el contribuyente deberá imputar, ante la A.F.I.P., la tenencia y/o bien declarados a la base imponible del o de los impuestos cuyo ajuste o determinación de oficio pretenda dejar sin efecto, de acuerdo con el mecanismo previsto para cada gravamen en el art. 46, inciso c) de la ley.

VII.- Que en el *sub examine*, conforme surge de la reseña efectuada y la normativa analizada en los considerandos que anteceden, el Fisco Nacional se opuso al acogimiento de la ley 27.260 (Título I, Libro II) efectuado por la actora, al entender que no se cumplían los requisitos que la normativa establece.

Compartiendo el criterio del organismo fiscal, el Tribunal Fiscal de la Nación entendió que no procedía el desistimiento en los términos de la normativa mencionada, tras considerar que no surgía en autos la presentación de adhesión al mencionado régimen, el Formulario N° 2009, ni el pago del impuesto especial.

Sin perjuicio de ello, interpretó los alcances del desistimiento formulado mediante el formulario F.408/NM presentado por la actora y tuvo por desistida a la misma de la acción y del derecho en los términos del art. 305 del C.P.C.C.N., con costas.

VIII.- Que, en orden a la consideración de lo señalado precedentemente, y tomando debida razón de que, en definitiva, el organismo fiscal al mantener su postura en orden a que lo relativo a los “ajustes técnicos” comporta un óbice sustancial a la consideración del pago de los tributos, y por consiguiente no se configuran los recaudos normativos pertinentes para admitir el acogimiento al régimen invocado por la contribuyente, es claro que subsiste la controversia sustancial acerca del fondo de la cuestión y lo atinente a la procedencia o improcedencia mentado acogimiento, por manera que se impone admitir el recurso interpuesto por la actora y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento del 24/11/2022 dictado por el Tribunal Jurisdiccional Administrativo.

Ello es así, a poco que se repare que el Tribunal *a quo* luego de concluir que no correspondía hacer lugar al planteo actoral en torno a la aplicación al caso de autos de la ley 27.260, no dio tratamiento al recurso de apelación originalmente presentado por la firma DTT S.R.L. contra las Resoluciones (DV RRCO) N° 70, N° 80 y N° 90/2012 sino que, como se viera, se limitó a tener por desistida a la mencionada de la acción y del derecho, por aplicación del art. 305 del C.P.C.C.N.,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

aspecto introducido de oficio por la instancia anterior puesto que, tal como surge de la compulsa de la causa y de lo manifestado en el memorial por la contribuyente - única habilitada procesalmente a petitionar en tales términos-, no surge que lo haya formulado expresamente, ni convalidado tal decisión.

Al respecto, cabe recordar que el principio de congruencia exige que la sentencia a dictar respete los límites que resultan de las pretensiones deducidas en el juicio por las partes (conf. inciso 6° del artículo 163 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria al presente por conducto del art. 197 de la ley 11.683).

En este sentido, le está vedado a los jueces apartarse de la relación procesal, pues la alteración unilateral de los términos de la *litis* genera agravio concreto al derecho de defensa, ya que son las partes -exclusivamente- quienes han de determinar el *thema decidendum* (cfr. esta Sala, *in rebus*: “Córdoba, Luis Alberto y otros c/E.N. -M° Justicia -DD.HH. -S.P.F. s/personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.”, Expte. N° 32.802/17, sentencia del [4/02/2020](#); “Piscitelli, Romina y otros c/E.N. -M° Seguridad -P.F.A. s/personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.”, Causa N° 365/19, del [30/12/2021](#), entre otros).

Por lo expuesto, no cabe más que concluir que la sentencia recurrida se apartó de las cuestiones planteadas por lo que debe ser calificada por tratarse de una resolución *extra petita* al no ajustarse ni a las constancias de la causa, ni al derecho aplicable.

Tal como fuera sostenido por la recurrente en su memorial, ésta no petitionó que en caso de serle denegada la pretensión de acogimiento en los términos de la ley 27.260 se la tenga por desistida en los términos del art. 305 del código procesal como fuera resuelto posteriormente; extremo que, a criterio de este Tribunal, resulta suficiente para la decidir la revocación de la sentencia recurrida, teniendo en consideración la manifiesta extralimitación de las facultades jurisdiccionales.

Una decisión en sentido contrario convalidaría el accionar del T.F.N. que importó la subrogación de la actora, contradiciendo así un principio procesal cuyo cumplimiento debe velar en todo proceso judicial, esto es: “...mantener la igualdad entre las partes” (conf. art. 34, inciso 5, apartado c, del C.P.C.C.N., aplicable por conducto de lo previsto en el art. 197 de la ley 11.683; cfr. esta Sala, *in re*: “A.F.I.P. -D.G.I. c/De Paola, Darío Leonel s/Ejecución Fiscal -A.F.I.P.”, Causa N° 37.663/2012, del [31/05/2022](#)).

En razón de lo hasta aquí expuesto, corresponde revocar la decisión de fecha 24/11/2022 y devolver las actuaciones a la instancia de origen, a fin de que –por intermedio de quien corresponda- se emita un nuevo pronunciamiento con que decida la totalidad de las cuestiones involucradas en la cuestión, conforme a derecho, a las constancias de la causa y al estado actual de la misma.



Por lo expuesto precedentemente, nada corresponde decidir sobre las demás cuestiones planteadas.

Por ello, el Tribunal **RESUELVE:** **1º)** hacer lugar a la apelación interpuesta por la parte actora y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento del 24/11/2022 y devolver la causa a la instancia de origen a efectos de que se emita un nuevo pronunciamiento, por intermedio de quien corresponda y **2º)** distribuir las costas en el orden causado, atento a las particularidades de la cuestión analizada (conf. art. 68, segundo párrafo, del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la ley 11.683, t.o. 1998 y modif.).

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA

MARÍA CLAUDIA CAPUTI

LUIS MARÍA MÁRQUEZ

